



LA RELACION IZQUIERDA-DERECHA EN LA POLITICA LATINOAMERICANA

Manuel ALCANTARA

Una de las más notables peculiaridades en la tradición política latinoamericana del último medio siglo ha sido la difícil conceptualización y ubicación de los distintos actores en torno al clásico binomio izquierda-derecha. Percepción que, debe indicarse inmediatamente, es así mismo tremendamente perversa en otros sistemas políticos de fuera de aquella región, tendiendo a serlo todavía más en los últimos tiempos.

De alguna manera, en América Latina tanto observadores como politólogos han tenido serios problemas para localizar y para clasificar, según la terminología aparecida después de la Revolución Francesa, tanto las nuevas fuerzas políticas surgidas o transformadas en las décadas recientes, como el comportamiento de los distintos líderes y de las políticas que pusieron en marcha. En este sentido, el panorama comienza a ser borroso a partir de la crisis de 1929, y esto se agudiza, en la mayoría de los

casos, si bien la generalización puede ser abusiva, tras el desarrollo de distintas formas del denominado Estado populista. No obstante, los acontecimientos que siguieron a la Revolución Mexicana contribuyeron notablemente a dispersar y a confundir los parámetros de denominación habituales. Finalmente, la confusión adquiere sus tintes más agudos en la actual situación en que se encuentran el discurso y la actuación de la mayoría de los gobiernos de los países en vías de consolidación democrática de América Latina, confusión que viene a asimilarse a la que ha ido creciendo en Europa desde la década de los años 60.

En el juego interesado del equívoco permanente, la pérdida de banderas substantivas, basadas en la más pura racionalidad, para identificar a la izquierda o a la derecha, perjudicó notablemente más a aquélla. De forma que la izquierda se precipitó en la espiral del apoyo a las soluciones abiertamente violentas. La desaparición de la defensa de la vigencia y del valor intrínseco del Estado de derecho, tanto durante el surgimiento y esplendor del Estado populista, como a lo largo de la década de los años 70, la abocó a un final cuyos límites no abarcaba. Estos quedaron definidos por las fuerzas conservadoras locales y su gran capacidad de maniobra, por los intereses económicos internacionales y, en gran medida, por los ejércitos nacionales. El choque con todo ello significó el feroz y prácticamente total exterminio de la izquierda. El idealismo de corte romántico fue aprovechado por la derecha con pragmatismo inequívoco para salir de la maltrecha situación en que había quedado tras las etapas populistas.

En la ceremonia de la confusión generada, cuando se estabilizaron los nuevos procesos electorales a partir de 1980 y después se produjo la alternancia política, no fue la izquierda la heredera del autoritarismo precedente. Por el contrario, un discurso huero fue la antesala de la llegada al poder de viejas siglas o coaliciones empujadas por amplias clientelas hasta entonces marginadas, las cuales deseaban cambios que les permitieran entrar dentro del sistema (Alan García, 1985; Michael Manley, 1988; Carlos Andrés Pérez, 1988; Carlos Menem, 1989; Alberto Fujimori, 1990). A su vez, se producía la virtual desintegración o la derrota por un estrecho margen de formaciones de izquierda, a las que se auguraba mejores resultados electorales, cuando no triunfos, (las lideradas por Alfonso Barrantes en la Perú, *Lula* en Brasil, los sandinistas en Nicaragua, y Juan Bosch en República Dominicana). Sin embargo, las políticas puestas hoy en marcha apenas se diferencian de las de sus predecesores ni se apartan del «único escenario posible».

El propósito de este artículo se centra en una exposición en torno a la reducida vigencia presente en América Latina del continuo izquierda-derecha, y a los factores que determinaron la peculiar evolución de los términos del binomio durante este siglo. Se concluye con una reflexión sobre la particular visión que la izquierda europea tiene de este fenómeno que ha contribuido aún más a una mitificación perjudicial y equívoca.

A efectos aclaratorios, a lo largo del artículo «La relación izquierda derecha» no se entiende en cuanto a la relación que los partidos, grupos, etc. de izquierda tienen con los de la derecha, según los valores clásicos de ambas acepciones. Por el contrario, se entiende como una fórmula integrada válida para un espectador exterior de cuya peculiar percepción pueden darse posteriores formas de acción o de alineamiento político. De esta forma, en función de una u otra percepción por parte del espectador se sitúa a un actor cualquiera del sistema político en la izquierda y a otro en la derecha. También puede suceder que sea imposible situar a uno y otro en la izquierda o en la derecha, bien por la confusión existente en los términos que conforman la fórmula integrada, bien por los equívocos que hay en las formas de comportamiento de los sujetos. En todos los casos se deriva una notable influencia en el sistema político, fundamentalmente en lo que atañe a la cultura política.

Las corrientes políticas durante el siglo XIX

La región se caracterizó hasta bien entrado el siglo XX por la inexistencia de un proletariado y de una burguesía de origen industrial, elementos clave sobre los que en Europa, tras la Revolución Industrial, se organizaron los partidos políticos. Estos protagonistas fundamentales del desarrollo del juego poliárquico europeo actuaron básicamente a partir de la legalización de las organizaciones sindicales y de la introducción del sufragio universal masculino. En América Latina, los grupos dirigentes se encontraban ligados exclusivamente al mundo económico del momento, cuyas líneas de acción se referían a la explotación agropecuaria de las tierras de las que eran propietarios y a los negocios de importación y de exportación sobre la base del control de las actividades portuarias y de las aduanas por parte del Estado oligárquico, y de sus relaciones con sus equivalentes europeas o norteamericanas. Durante el tiempo en que el sufragio fué censal, cuando sólo esta élite tenía acceso al voto y de ahí al poder político por mediación de sus clubes políticos, los sectores vertebrados en torno a la actividad agroexportadora conformaban la única bipolaridad existente en el momento: los hacendados frente a los comerciantes, los partidarios del proteccionismo frente a los librecambistas.

A esta disputa en el marco económico se añadieron las diferencias en torno al papel que debía desempeñar en la economía el esclavismo o su supresión. Pero también, la manera de organizar el Estado en lo referente al peso de las provincias o entidades territoriales frente al del Estado central: federalismo o unitarismo. Finalmente, se introdujo la cuestión religiosa con respecto al grado de relación que debían mantener el Estado y la Iglesia católica. Estos elementos, integrados y combinados de forma diferente en cada caso nacional, dieron paso a la ecuación liberales-conservadores presente por entonces en prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos.

Así surgieron los primeros gérmenes de partidos políticos, los cuales no solamente dirimieron sus diferencias en la lucha política sino también en el campo de batalla, estando en la base de las numerosas guerras civiles que llenaron la historia iberoamericana hasta bien entrado el siglo XX. El ejemplo clásico en este sentido lo constituyeron Colombia y Venezuela, así como gran parte de los países centroamericanos. En muchos casos, la polarización fue tan profunda que llegó a conformar auténticas subculturas en la sociedad, de suerte que según se fueron incorporando los distintos sectores a la vida política, —bien como consecuencia del ascenso social, de la extensión del sufragio o de la inmigración—, también se fueron integrando en los núcleos subculturales preexistentes. Los casos más evidentes se dieron en Colombia y Uruguay, donde la adscripción a los partidos liberal y conservador, o Blanco y Colorado, respectivamente, señaló una profunda segmentación a la vez que la adquisición de una identidad específica que perduraría durante generaciones, y que ayudaría de manera decisiva a la integración nacional. En otros casos, el antagonismo se quebró por largo tiempo cuando en la lucha partidista uno de los contendientes capitalizó recursos foráneos para mantenerse o alzarse con el poder. La vinculación de los conservadores mexicanos con el proyecto imperial afrancesado de Maximiliano en 1864 prácticamente les incapacitó de por vida para volver al poder; igualmente, el recurso de los liberales centroamericanos en 1856 a William Walker y sus mercenarios para alcanzar el poder, hizo que éste se mantuviera en manos de los conservadores por otra generación. Por último, la implicación de los liberales y conservadores panameños en la guerra civil colombiana de «los mil días», disparó a aquéllos, tras su derrota, a acelerar el proceso de independencia nacional. Aunque debe señalarse que nada parecido sucedió, a partir de la primera década del siglo XX, con motivo de las invasiones norteamericanas en el área del Caribe y de Centoramérica donde, dadas sus especiales características, contribuyeron a la instalación de longevos gobiernos títere, como fue el caso, sobre todo, de Panamá, Cuba, República Dominicana, Nicaragua y Haití.

Las variaciones en el tejido social a inicios del siglo XX

El paulatino cambio de la estructura social, consecuencia de la emigración, de la expansión productiva de las grandes haciendas y plantaciones, —una vez abolida la esclavitud completamente en el último tercio del siglo XIX—, del desarrollo minero tras las fuertes inversiones de finales de siglo y, finalmente, de la evolución del Estado nacional hacia formas de actuación más complejas, amplió notablemente la clientela potencial de los partidos. Los inmigrantes se ubicaron principalmente en los países del Cono Sur. Procedían en su mayoría del sur de Europa, donde un incipiente movimiento sindical y de ampliación de la participación política les había hecho tomar conciencia de su papel en el entramado político. Sus luchas reivindicativas se engarzaron con las locales, que venían demandando la ampliación de los derechos civiles, entre ellos el derecho

de sufragio (fue el caso de la potenciación del Partido Radical en Chile y del surgimiento de la Unión Cívica Radical en Argentina). Los trabajadores de los centros agrícolas y mineros se centraron en la organización de asociaciones de socorro mutuo y de defensa de sus intereses, sin articularse, en un primer momento, como movimientos de reivindicación política. En todas estas situaciones aparecía, sin embargo, un denominador común que caracterizaba la acción política de los nuevos sectores proletarios. Se trataba de una mentalidad de corte típicamente anarcosindicalista que se engarzaba, en el caso de los inmigrantes mediterráneos, con su tradición local y, en el del proletariado rural, con el propio proceso de confirmación de la toma de conciencia anarquista, habitual en este tipo de comunidades. Como es conocido, uno de los elementos más peculiares de la cosmovisión anarquista consistía en el rechazo de cualquier forma participativa tendente a la representación política y su sustitución por la acción directa. Esta comprensión atrabiliaria de la política hacía todavía más difícil la incorporación y movilización en agrupaciones partidistas a estos importantes sectores de la población.

Desde esta perspectiva de una peculiar evolución en el surgimiento de grupos sociales hay que entender la configuración de los partidos políticos iberoamericanos en su acepción moderna. Sin embargo, no debe desdeñarse la relación de estos grupos sociales con la mayor o menor velocidad de avance en las formas de producción, que se tradujo en la debilidad política de los sectores medios y populares. En general, se trataba de una evolución diferente a la global europea, pero no excesivamente distinta a la española, griega, italiana o portuguesa. Complementariamente, otro indicador que reforzó la debilidad de los partidos políticos latinoamericanos fue la adopción en la práctica totalidad de las constituciones del sistema presidencialista de gobierno. El presidencialismo, en cuanto esquema personalista y escasamente consociacional, anuló el papel que hubieran podido desempeñar los partidos conforme se fueron introduciendo modificaciones que ampliaban el sufragio hasta niveles homologables al resto de Occidente. Una política fuertemente personalizada, el sistema presidencialista y, aún más, la preponderancia del presidente de la República, hacía que se creasen en torno a esta figura, más que en torno a programas generales o a comités de acción, movimientos políticos dirigidos a apoyar su candidatura en el momento electoral. La escasa relación con el Parlamento por la casi nula existencia de formas de control, y por la capacidad legislativa de aquél, no propiciaba la riqueza de la vida parlamentaria y por ende la conformación de grupos de discusión de ideario afín. Esta perniciosa dinámica no sólo ahuyentaba cualquier posibilidad de llegar a gobiernos de coalición, sino incluso la de organizar un juego gobierno-oposición de carácter siquiera bipartidista. Los efectos de esta personalización de la política fueron tan dañinos que en situaciones que se consideraban prácticamente consolidadas generaron elementos disfuncionales que propiciaron el colapso del régimen. En este sentido, el quehacer de Hipólito Yrigoyen (1916-22) en Argentina dió paso a una lógica personalista-antipersonalista en el seno de la misma Unión Cívica Radical

ajena por completo a la teoría dinámica gobierno-oposición. En Uruguay, el batllismo, a partir de 1903 —conjuntamente con la ingeniería electoral—, apuntaló de tal manera la supremacía del Partido Colorado que hizo imposible la alternancia durante mucho tiempo. Otro ejemplo contemporáneo lo ofrecía Chile, donde se había generado una práctica parlamentaria sobre un trasfondo constitucional presidencialista. Durante el primer cuarto de siglo, los presidentes agotaban invariablemente sus rígidos mandatos, mientras que una pléyade de gobiernos y de ministros se sucedían debido a las mociones de censura del Parlamento. La combinación de la inamovible estabilidad presidencial junto con el baile de gabinetes y el bullicio parlamentario, únicamente consiguieron desmenuzar todavía más el ya de por sí múltiple sistema de partidos chileno, amén de la fractura del régimen en 1925.

En todos estos casos, los partidos políticos se reforzaban en su papel de potenciar intereses concretos de las clases dirigentes, más que de representar intereses de otros sectores mayoritarios, y menos aún de activar o de recoger debate alguno sobre diferentes posibles modelos de articulación social o económica. Básicamente sólo el aprismo, tras su aparición en la primera mitad de la década de los años 20, consiguió romper esta inercia; su programa radical, nacionalista, antiimperialista, socialista e indoamericanista, influyó notablemente en los partidos políticos de la época a pesar de que no alcanzó el poder por aquel entonces y de su proscripción y persecución en los años posteriores. Al lado surgieron formaciones socialistas que únicamente llegaron a tener relevancia en Argentina y en Chile.

Curiosamente, sin embargo, en el terreno de las ideas políticas se podía encontrar una mayor vitalidad, así como un juego más abierto que en el ámbito de la realidad cotidiana. La recepción del pensamiento conservador y liberal registrada a lo largo del siglo XIX vino acompañada del positivismo, que influyó decisivamente al porfiriato en México, del krausismo, que lo hizo sobre el radicalismo argentino, y del marxismo, reelaborado en Perú por Juan Carlos Mariátegui y en Chile por Emilio Recabarren. En el caso del marxismo, a pesar de su elaborada riqueza teórica no llegó a vertebrar ningún partido político con una presencia significativa en el continente, salvo el caso de los partidos socialista y comunista chilenos, y del socialista argentino hasta 1930.

En todo caso, hacia el primer tercio del siglo XX la percepción en torno a la relación izquierda-derecha era bastante similar a la europea. Ambos campos se encontraban definidos por parecidos valores en los dos continentes. Solamente la debilidad de la clase obrera en el caso latinoamericano dificultaba la organización y el éxito de formaciones basadas en la ideología de clases. La política, en términos globales, se encontraba limitada por idénticas restricciones en uno u otro lado del océano, estando el ideal democrático muy lejos de conseguirse.

La Gran Depresión trajo consigo un profundo cambio en las formas políticas latinoamericanas que se tradujo en la mayoría de los casos en la reaparición de gobiernos militares que contaron con el apoyo de la oligarquía local y de amplios sectores de la burguesía ascendente. El comportamiento de estos sectores sociales hizo que cerraran filas en torno a la solución militar que, por una parte, les prevenía del peligro de las movilizaciones sociales reivindicativas tan en boga desde la década de los años 10 y acentuadas tras el desencadenamiento de la crisis y, por otra, garantizaba una estabilidad tradicional y el mantenimiento del modelo de acumulación y de relaciones sociales existente. En todo caso, se trataba de minimizar las pérdidas que iban a producirse debido a la crisis económica.

Sin embargo, su actitud no quedó reducida a este comportamiento de carácter supuestamente pasivo, similar al que se produjo en España durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1929). En el caso latinoamericano, la derecha se encuadró en un ámbito que tuvo a gala la utilización de la ficción electoral. De esta forma, bajo el control o la tutela militar de la situación, se pretendió continuar la política anterior a la crisis mediante la convocatoria de elecciones, en la mayoría de los casos por sufragio universal (masculino), pero adulterando completamente tanto su realización como su significado. Los resultados eran manipulados, algunos candidatos eran proscritos y los minoritarios partidos de izquierda censurados u perseguidos por sus «conexiones internacionales». Esta fue la norma claramente vigente en Argentina entre 1930 y 1943; en Perú entre 1933 y 1945; en Brasil en diferentes periodos entre 1930 y 1950; en Ecuador de forma generalizada desde 1933 y durante cuarenta años; en Cuba durante los años iniciales del primer «batistato» entre 1934 y 1940; pero también en América Central, de manera más significativa en El Salvador durante un lapso muy dilatado, y en Guatemala hasta 1944. Comportamiento que desempeñaron también algunos de los dictadores más reaccionarios de la época, como fueron los casos de Rafael L. Trujillo en República Dominicana, los Somoza en Nicaragua y Juan Vicente Gómez en Venezuela, que usaron a su medida la parafernalia electoral como pretendida bandera de su alineamiento con las prácticas democráticas frente a las no democráticas, que ya entonces comenzaban a circunscribirse exclusivamente a los comunistas y afines. Así mismo fue la senda tomada por el nuevo régimen mexicano por mucho que el carácter del mismo en la época tuviera connotaciones de izquierda, como fue el caso de la presidencia de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940.

Por esta época, en los países aún colonias inglesas, comenzó a desarrollarse una tímida forma de representación política en instituciones de autogobierno local a la que concurrieron el embrión de los partidos políticos actuales, generados desde el movimiento sindical, que era anterior a cualquier otra forma de expresión política. No obstante, el mismo momento

fundacional de los nuevos y primitivos partidos políticos estuvo sesgado, tanto por el idéntico y único origen del que procedían, como por la influencia del modelo de Westminster que aportaba la metrópoli y en el que el parlamentarismo (no el presidencialismo), el sistema electoral mayoritario y el bipartidismo eran la nota fundamental. Así mismo, el hecho de tratarse de economías de enclave y de configurarse su sociedad bajo patrones étnicos diferentes a los del resto de América Latina, afectó tanto al desarrollo del nacionalismo como del populismo, alcanzando ambos un carácter muy *sui generis*.

De esta suerte, en Jamaica y Trinidad y Tobago se conformaron sistemas bipartidistas que teóricamente daban cobijo a una lógica derecha-izquierda, pero ésta se diluía a causa del idéntico origen de sus clientelas y del carácter personalista-populista de algunos de sus líderes, forjadores de la independencia (Alexander Bustamante en Jamaica y, en otra medida, Eric Williams en Trinidad). A comienzos de las décadas de 1940 y de 1950, el carácter ideológico de los grupos políticos que pugnaban por liderar el proceso independentista se confundía, como ocurría en los restantes países continentales. Posteriormente, aunque el populismo trinitario de Williams continuó extendiéndose hasta su muerte en 1981, la política en Jamaica llegó a alcanzar un grado de polarización muy elevado entre 1971 y 1989. En este último caso se cristalizaba así el enfrentamiento anterior entre la facción de Bustamante y la dirigida por Norman Manley.

La frustración se extendió inmediatamente a amplios sectores sociales de América Latina cuya capacidad de acceder a un juego electoral lícito había sido una realidad poco tiempo antes, sin que por la precariedad existente hubiese existido ninguna posibilidad de cristalizar la situación recién originada en nuevos esquemas partidistas. Esta impotencia en lo que respecta a una mínima capacidad de movilización, unida a los efectos de la crisis en ámbitos diferentes —que abarcaban desde el incremento del papel del Estado en la política de sustitución de importaciones y su papel de árbitro en la nueva trama de relaciones socioeconómicas, hasta la depauperación social, pasando por la potenciación del proceso de urbanización—, estuvo en la base de la justificación de la aparición del populismo. Pero también, y es lo más importante, en la vampirización que éste llegó a realizar del bagaje tanto ideológico como mayormente simbólico de la izquierda. El éxito, durante décadas, de su puesta en escena dejó una vez más, pero ahora por un largo y decisivo periodo, a aquélla sin resuello, y al observador confuso ante un nuevo escenario político planteado de forma muy distinta del cartesiano recogido en los manuales sobre sistemas políticos.

El Estado populista

El Estado populista fue la forma política latinoamericana más clásica surgida después de la crisis de 1929. En términos globales, el concepto de

Estado populista hace referencia a una situación dominada por la movilización de masas urbanas, vinculadas a un dirigente carismático bajo una lógica movimientista en la que predomina el antagonismo amigo-enemigo y un discurso altamente emocional. El líder utiliza los recursos y resortes del poder para satisfacer necesidades mínimas de la población sin efectuar reformas estructurales; el nivel de institucionalización es difuso, estando perfectamente jerarquizado. A pesar de esto, las expresiones que tomó a lo largo de tres décadas en América Latina presentaban conformaciones profundamente diferentes. Los elementos que le dieron forma a partir de 1935 llegaron a provocar una confusión generalizada en la iconografía y en las representaciones de la relación izquierda-derecha. El notable incremento del sector público en un Estado organizador y fuertemente intervencionista, la asimilación y uso del concepto de pueblo, y la potenciación del nacionalismo fueron las notas más relevantes sobre las que se alzó el nuevo entramado estatal. Si bien es cierto que algunas de ellas no fueron exclusivas del Estado populista, éste tuvo la capacidad de integrarlas en un proyecto político autónomo cuya repercusión visible se tradujo en la total confusión de las identidades del continuo izquierda-derecha. A partir de la experiencia del Estado populista en cada caso nacional, se produjo un profundo desvanecimiento de la realidad de lo que se había entendido hasta entonces por izquierda o por derecha.

Las diferentes versiones del Estado populista comportaban elementos y características muy variopintas. Esta serie de modelos recogieron los dos primeros movimientos que surgieron con el cardenismo en México y con el varguismo en Brasil; junto con los de la segunda hornada, peronismo en Argentina, el trienio «adeco» en Venezuela, el proyecto frustrado de Gaitán en Colombia, y más adelante el rojismo y el ibañismo en Chile. Además, a lo largo de todo este periodo estuvo presente el velasquismo en Ecuador; y por último los procesos reformistas de Guatemala y de Bolivia en la primera mitad de la década de los años 50, aunque estos dos últimos se alejan propiamente de la concepción clásica populista, si bien incrustraron a sus respectivos sistemas políticos algunas adherencias del populismo.

Con respecto a los elementos citados anteriormente que fue capaz de aunar el Estado populista, tomó de la izquierda la idea de incrementar el papel que debía asumir el sector público en un Estado organizador fuertemente intervencionista (estrategia ya avanzada en la década de los años 30 por la derecha argentina y la izquierda frentepopulista chilena). Ahora bien, este papel llegaba a definir las reglas del juego y era parte fundamental en la puja distributiva y en el diseño de acciones tendentes a la disminución de las desigualdades.

En relación a la asimilación del concepto de pueblo, cuyo antecedente continental inmediato era la Revolución Mexicana, y extracontinental el empuje del fascismo y del comunismo europeos, éste pasaba a tener un significado vital, tanto en el discurso como en la parafernalia icónica, de

suerte que el pueblo se convertía en el sujeto teórico de toda acción política y en su reconocimiento último. La promoción de las grandes movilizaciones populares y el desarrollo oficial del sindicalismo vertical eran algunos de los aspectos fundamentales que, con el tiempo, estuvieron en la base de la justificación del rechazo de la ya entonces denominada despectivamente «democracia formal». El contacto directo del líder con el pueblo, siguiendo una lógica movimientista, y la satisfacción de las necesidades inmediatas de éste, fue la coartada para despreciar y violentar a la oposición política, cuya posibilidad de acceder alguna vez al poder parecía más remota.

Finalmente, como ya quedó enunciado, se potenció el nacionalismo. Aspecto que, si bien podía proceder del universo axiológico de la derecha, tomaba más elementos de la cultura de la izquierda, en cuanto que fue un vehículo ideal para dar identidad nacional a numerosos sectores sociales —marginados por proceder de la emigración o por su propio carácter excéntrico—, ya que tenía una significación antiimperialista. En este sentido, mediante la bandera nacionalista, se enfatizaban los perjuicios que a la soberanía nacional ocasionaba la dependencia económica en todos los órdenes. Esto último era así, tanto en unas relaciones basadas en la estricta especialización local de la explotación de bienes agropecuarios o de minerales cuya extracción no suponía ningún valor añadido, como en el enorme monto de capital extranjero invertido en la economía del país y que le daba un carácter desnacionalizador. Con relación estrictamente a la derecha, la alusión al nacionalismo giró en torno a la búsqueda de la promoción de los supuestos valores nacionales autóctonos, que en unos casos fueron el indigenismo (México) y en otros el catolicismo (Ecuador) o la tradición hispánica (Argentina en un primer momento).

Pero también el Estado populista asumió de la derecha la idea del control global del sistema para evitar cambios bruscos y no deseados, que por entonces se asimilaban al ascenso de los partidos de corte obrero e ideología socialista o comunista. El anticomunismo de todos los regímenes populistas era prueba evidente de esta identidad de objetivos con la derecha, que a medio plazo les hizo mantener cierta coexistencia no beligerante. En este orden de cosas, igualmente tomó de la derecha el más puro desprecio por la ideología liberal, representaba por el Estado de derecho y en su trascendencia en el juego gobierno-oposición en las distintas instituciones democráticas existentes en diferentes niveles (nacional, regional, local), y en el ejercicio de los derechos civiles, todo lo cual fue sistemáticamente violentado e ignorado.

La expansión del Estado populista y el éxito en su capacidad movilizadora de las expectativas de los sectores mayoritarios de la sociedad, por entonces marginados, dejó a la izquierda sin clientela y perpleja por el rapto de sus enseñanzas. Paralelamente, la derecha superó tímidamente su preocupación inicial al comprobar que la proclama nacionalista no con-

llevaba la pérdida de sus propiedades ni la completa ruptura con el socio extranjero. Durante aquella época, en los variados escenarios posibles, se consumaba, por tanto, el camuflaje del binomio izquierda-derecha en una realidad globalizante que llegó a caracterizar con mayor significado y plenitud la política latinoamericana del siglo XX. Mientras que los populistas eran acusados por la derecha de ser comunistas, marginaban a éstos en un reducto no libre de represión y violencia.

La crisis del Estado populista

En un ejercicio de arriesgada generalización para todos los países latinoamericanos, podría mantenerse que el Estado populista sucumbió víctima de su ineficacia para resolver la ecuación económica a la que hubo de enfrentarse tras el diseño de una política económica no viable a largo plazo, puesto que tenía serios problemas para enfrentarse de una manera real al déficit fiscal y a los efectos derivados de la política de sustitución de importaciones.

En cuanto a la ecuación política pendiente de resolver, se enfrentaba con cinco incógnitas que se conectaban con algunos de los elementos fagocitados de la izquierda y de la derecha.

En primer lugar, la no resolución del dilema de su definición política con relación a las reglas de juego establecidas, cayendo en la ambigüedad en cuanto al continuo izquierda-derecha, hizo caer al Estado populista en una serie de contradicciones que se enmarcaban en una situación internacional nueva. El mundo internacional acababa de redefinirse por la derrota del fascismo y por la existencia de la guerra fría que confrontaba dos sistemas opuestos, los cuales, en el terreno de la política, se simplificaban en la disyuntiva reduccionista: democracia frente a comunismo. Bajo esta perspectiva, no quedaba espacio para formas políticas tibias que se referían al mantenimiento de un «*Estado novo*» (Getulio Vargas), a una «nueva democracia» (José María Velasco Ibarra), a una «tercera posición» (Juan Domingo Perón), o a esquemas movimientistas en general. Pero, así mismo, en segundo término, el nacionalismo formulado, aparte de retórico, resultaba agresivo, por aislacionista, en el seno de unas relaciones internacionales definidas bajo la imperativa lógica del alineamiento y, consecuentemente, de la interrelación.

En tercer lugar, el Estado populista no supo manejar un alto grado de concentración del poder y de recursos en sus manos para promover efectivas políticas distributivas a largo plazo (déficit fiscal y política de sustitución de importaciones). Además, no se desplazó de una postura que no contenía deseos reales de modificar el centro de gravedad del poder del sistema, ya fuera meramente a través de una reforma fiscal general o de promover la productividad efectiva de la economía. La ausencia, o el bloqueo, de mecanismos de interlocución y de negociación, así como la

propia lógica del régimen, escasamente flexible y gradualista y nada proclive al pacto, impedía todo proceso satisfactorio.

En este sentido, y sería el cuarto factor, tampoco supo resolver con éxito sus relaciones con la oposición, que no dejó de existir en ningún momento, y que con mayor o menor virulencia hizo oscilar su postura en un obligado comportamiento de oposición semidesleal y/o de oposición desleal. La oposición se encontraba enmarcada en compartimentos estancos por la propia definición totalizadora del régimen, e incluía a sectores de la derecha y de la izquierda. De esa forma le resultaba extremadamente difícil autodefinirse, salvo por los genéricos, y a su vez aglutinadores, «contra» y «anti», renunciando también a localizarse en el continuo izquierda-derecha. Todo ello asimilaba al régimen oficial con cualquier otro de carácter dictatorial y sepultaba la variopinta oposición en una pérdida evidente de identidad, mucho más sensible para la izquierda a causa del diseño del régimen.

El último término, el Estado populista no consiguió engarzar en su proyecto al ejército, que mostró poseer una gran autonomía a lo largo de toda la vigencia de aquél. El Ejército aparentemente se integró en los inicios de algunos de los gobiernos populistas atraído básicamente por las concepciones nacionalistas y anticomunistas de aquéllos. Sin embargo, la respuesta del Ejército fue negativa en el momento en que el régimen intentó realizar un completo control de su actuación. Cuando el Ejército no reaccionó homogéneamente, como sucedió en la mayoría de los casos, el sector principal o mayoritario nunca apoyó al gobierno, interviniendo decisivamente en su caída. Esto no significó, como regla general, que se aliaba a una sola de las partes opositoras en liza y no a un sentimiento social de rechazo mucho más generalizado. Los casos del comportamiento del Ejército en Ecuador y en Argentina mostraron esta tendencia, no debiéndose asimilar a los hechos acaecidos en Guatemala y en Bolivia, que presentaban una casuística muy distinta.

La quiebra del Estado populista no tuvo lugar bajo situaciones semejantes en toda América Latina, de forma que en aquellos casos en que su desarrollo tuvo un grado de sofisticación mayor, y sus realizaciones y asentamiento un nivel de elaboración menor, las consecuencias para el futuro de la relación izquierda-derecha fueron significativamente mucho más perjudiciales que en el resto de las situaciones. Así fue al menos durante tres décadas en Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, no sucedió de igual manera en aquellos países donde las experiencias populistas fueron más suaves, como en los casos de Chile (Carlos Ibañez del Campo), Costa Rica (José Figueres) o Jamaica (Alexander Bustamante); en estos casos la bipolarización política clásica recuperó inmediatamente plena vigencia. Un caso diferente fue el de Colombia, ya que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, debido a la extraordinaria fuerza de los partidos políticos tradicionales, no dispuso del tiempo necesario para eclipsar al juego partidista, que quedó extremadamente reforzado por las caracterís-

ticas propias del Frente Nacional. Paralelamente, la actuación de la derecha en los derrocamientos de los gobiernos de Jacobo Arbenz (Guatemala) y de Víctor Paz Estenssoro (Bolivia), supuso un avance evidente en las etapas que posteriormente se produjeron en los distintos países. De suerte que en estas situaciones se adelantó y apareció nítido el protagonismo ventajista de la derecha tras la crisis del Estado populista.

En la gran mayoría de los casos, la izquierda se encontró, de forma virtual, ideológicamente desnuda, tras la caída de los regímenes populistas. Además, la izquierda aparecía inmersa en una situación que asimilaba como agresiva y que estaba definida al menos por cuatro elementos sobresalientes. El primero se refería a la vuelta de la estrategia electoralista en algunos países, nuevamente tintada por prácticas excluyentes (la proscripción del peronismo, del velasquismo y del aprismo) y fraudulentas (Perú, 1962; Guatemala y Bolivia después). El segundo comprendía la perplejidad que para toda la izquierda regional supuso el triunfo de la Revolución Cubana, en su condición de método heterodoxo para llegar al poder, y en la inmediata respuesta contrarrevolucionaria que comenzaba a alzarse en todos los restantes Estados. El tercero concernía a la adopción de una visión inequívocamente prooccidental, que se movía en los ejes de una estrecha vinculación con los Estados Unidos (de los que se acababa de aceptar la política diseñada para la región en la Alianza para el Progreso) y de un ferviente anticomunismo (en un momento en que ya sí había comunistas en el poder en un país del área). El último elemento supuso la puesta en marcha de algunas políticas reformistas que intentaban imponer un ritmo de cambio moderado sobre la base de algunas premisas del Estado populista, fundamentalmente en el énfasis en el papel del Estado y en el mantenimiento de cierto carácter nacional. En este sentido iban dirigidas las actuaciones de los gobiernos de Eduardo Frei en Chile, de Arturo Frondizi en Argentina, de Fernando Belaúnde en Perú y de Joao Goulart en Brasil.

En plena década de 1960 los puntos de definición de la relación izquierda-derecha se centraban en el seno de la Iglesia católica, especialmente tras la conferencia episcopal de Medellín en 1968, en el papel del Estado en cuanto a la política fiscal a poner en marcha, en la forma de realizar la reforma agraria, y en el grado de control de la inversión extranjera y sus beneficios.

La izquierda en el marco de la respuesta autoritaria

La década de los años 60 vió como se generaba una propuesta desde la izquierda que tenía en cuenta todos los antecedentes señalados y que se resumía en el rechazo del reformismo, en el intento de agudizar las denominadas «contradicciones internas» de los regímenes, y en la idea de que la única salida posible a la marginalización y a la postergación era la vía cubana. Esta máxima era prácticamente irrefutable en los medios en los

que el Estado populista había dominado la situación y más discutible en los restantes casos. En ellos existía una tradición de lucha partidista más arraigada y al menos compartía la izquierda mínimas esferas de poder en distintas instancias (parlamentos, municipalidades, etc.). El éxito de la Revolución Cubana tuvo aún mayor significado por cuanto que el aislamiento del proceso y el ensañamiento del acoso a que fue sometida por el gobierno de los Estados Unidos la convirtieron en un símbolo mítico.

La respuesta insurreccional que comenzó a articularse en gran parte de los países latinoamericanos fue corolario directo de la influencia cubana al ponerse en práctica la teoría del «foco guerrillero» que debía convertir la región en «uno, dos, tres, muchos Vietnams», simbolizada por Ernesto Che Guevara. Poco después, en 1968, se abandonó la concepción guevarista adoptándose la de la lucha a través de movimientos más heterogéneos y menos selectivos. La opción guerrillera se identificó con formaciones políticas emergentes que ponían en cuestión el sistema (caso de los tupamaros y del Frente Amplio en Uruguay), que buscaban una identidad en un movimiento más genérico (los montoneros dentro del peronismo en Argentina) y que pretendían una reforma radical el sistema (el M-19 en Colombia). Pero en otros casos se volcó directamente en pro de un proyecto propio (el ERP en Argentina y distintos grupos en Colombia). En esta última dirección también se integró toda la izquierda centroamericana, cuyas posibilidades de llegar al poder eran incluso más marginales que las del resto de América Latina, intensificándose las actividades guerrilleras en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Con independencia de esta línea de actuación, se desarrollaron así mismo formas de lucha más complejas pero que compartían una filosofía similar cuya expresión más conocida en el Caribe anglófono fue el movimiento de *black power*.

Otro elemento que coincidió temporalmente con los nuevos planteamientos de la izquierda fue el notable cambio de actitud generado en un sector de la Iglesia católica como consecuencia de la irrupción de la «teología de la liberación». Auspiciada formalmente por la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 1968, la teología de la liberación fomentó el compromiso de la Iglesia con los derechos y la liberación de sus feligreses más pobres y marginados. La Iglesia pasó a constituirse en la «voz de los sin voz» y a articularse como un actor político más activo. Esta posición introdujo un nuevo factor de polarización desde un medio que, hasta entonces, se había caracterizado por ser la quintaesencia de la defensa de valores tradicionales. En el seno de la Iglesia-institución aparecía una controversia desconocida hasta entonces, por cuanto que las actuaciones de la misma en el juego político implicaban efectos indiscutibles en el proceso de toma de conciencia de núcleos ciudadanos. Aún más, el liderazgo ejercido en algunos momentos desde el ámbito eclesiástico sirvió para instrumentalizar profundos intentos de cambio a los que tampoco fue ajeno el uso de la violencia para combatir, en su terminología, la realidad de pecado que suponía la injusticia socioeconómica.

El final de la década de los años 60 contempló la aparición de dos tipos de situaciones que, sin evadirse del panorama restante, aportaron elementos nuevos para la escenificación de la relación izquierda-derecha. Se trataba de la entrada en el marco político de los militares reformistas dispuestos a poner en marcha desde el poder una serie de acciones ampliamente avaladas por sectores significativos de la izquierda. Los militares en Perú bajo el mando de Juan Velasco Alvarado, la Guardia Nacional panameña dirigida por Omar Torrijos, los militares bolivianos bajo el breve periodo de mando de Juan José Torres, y los militares ecuatorianos bajo Guillermo Rodríguez Lara, se disponían a realizar las reformas necesarias tendentes a desarrollar sus respectivos países bajo patrones nacionalistas y nacionalizadores, y a asegurar una distribución más justa de la riqueza. El rechazo a la política en su aceptación partidista y electoral, y el proyecto de mantenerse en el poder *sine die* hasta que se culminaran las reformas necesarias, fue compartido ampliamente por la izquierda. Ente este sentido, el paroxismo llegó a tal grado que la izquierda uruguaya vislumbró esperanzas en que sus militares protagonizaran un golpe «a la peruana» en 1973, con las consecuencias conocidas.

La segunda situación, con connotaciones más clásicas, se produjo en Chile y en Jamaica, países en los que mediante el sufragio alcanzó el poder un gobierno de izquierda. Sin ser homologables ambos casos por tratarse fundamentalmente de sistemas políticos distintos, sí mostraron el cortísimo margen de maniobra de que podía disponer la izquierda una vez en el poder. El gobierno de Salvador Allende se encontró sometido a un continuo acoso en el marco de las instituciones políticas y a un «bloqueo invisible» económico por parte norteamericana. En esta coyuntura, el gobierno de la Unidad Popular apenas pudo desarrollar su programa sin conseguir evitar que la situación política se polarizase, ahora sí según el clásico binomio izquierda-derecha, de forma que en pocos meses la inestabilidad y la falta de eficacia eran las notas predominantes, todo lo cual condujo a la quiebra del régimen democrático mediante un golpe de Estado que contó con un significativo apoyo social. En Jamaica, la variable externa fue aún más destacada que en Chile, toda vez que en el ámbito interior el gobierno de Michael Manley pudo contrarrestar a la oposición por el carácter parlamentario del régimen. Sin embargo, la asfixia exterior sobre las condiciones de exportación de la bauxita y las repercusiones de la crisis energética generaron una dramática situación socioeconómica que brindó en bandeja el triunfo de la oposición de la derecha cuando Manley terminó su segundo mandato.

En la gran mayoría de los casos, la respuesta a los planteamientos de la izquierda trajo aparejada la puesta en marcha de sangrientos procesos autoritarios, ampliamente apoyados por la derecha sociológica, que borrarón todo atisbo de izquierdismo, tanto en las formas sociales como en las culturales. La izquierda quedó sumida en un proceso depresivo fruto de la represión a la que fue sometida, al fracaso de su proyecto, a su culpabilidad en algunas situaciones al abrir la caja de Pandora de las expresiones más

brutales y represivas del militarismo, y a su aislamiento social anejo a la enorme pérdida clientelar precedente.

Frente a esta coyuntura de la izquierda extensible a toda América Latina, existían seis países como excepción y asimilables a tres situaciones. La primera se referiría a los casos en que históricamente la izquierda se ligó a la Internacional Socialista: Costa Rica y Venezuela. Ambos países, desde 1949 y 1958 respectivamente, se enmarcaron en un juego electoral de tipo bipartidista, con una lógica *sui generis* en la relación izquierda-derecha, que logró mantener el equilibrio y por ende el sistema. En esta situación podría incluirse a la República Dominicana después de 1978, si bien su sistema de partidos fue abriéndose hacia el pluripartidismo. La segunda situación incluiría a los casos en principio tan poco homologables de Colombia y de México, pero en ambos se había conseguido mantener una ficción de sistema político abierto pero suficientemente cerrado para asegurar su supervivencia. En Colombia, la asfixia conservador-liberal era del mismo nivel que la generada en México por el PRI, con la diferencia de que en este último caso su propia configuración le hacía posible presentarse como un figura poliédrica, una de cuyas caras fue durante mucho tiempo el izquierdismo. La tercera situación recogería el caso de Cuba. Fidel Castro, ayudado por los avatares de la consolidación inicial de su régimen anteriormente indicados, supo erigirlo en el modelo latinoamericano por excelencia. Modelo que, al perfeccionamiento de los parámetros recogidos por el Estado populista, añadía un esquema de acción política autoritario en el que se daba cabida a la «oligarquía consultiva» que venía a representar el Partido Comunista de Cuba y una organización institucional próxima a la soviética.

Las transiciones democráticas y la relación izquierda-derecha

Una de las características que componen casi todos los procesos de transición política acaecidos desde finales de la década de los años 60 hasta la actualidad es su condición pactista. Con la excepción de Nicaragua en 1979 y de Argentina en 1983, donde después de derrotas militares el régimen anterior se desintegró totalmente en el primer caso y aceleradamente en el segundo, en los restantes países las Fuerzas Armadas tuvieron capacidad, en mayor o menor medida, de imponer tanto las reglas del juego como el calendario de la transición. Así ocurrió en Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

En Nicaragua, la nueva situación presentaba características fundacionales de un nuevo sistema político sobre la base de un triunfo insurgente aupado sobre un amplio proceso de movilización social que daba paso a un ensayo de conformación de un orden muy exclusivo bajo el paraguas único del Frente Sandinista de Liberación. El nuevo sistema daba cabida, posiblemente debido a presiones foráneas, a un elemento marginado en la

En cuanto a Argentina, el colapso del gobierno militar devolvió el estado de las cosas a 1976, con la izquierda virtualmente eliminada y unos partidos políticos «atrápalo todo» que podrían dar cabida en su propio seno a que se configurase de nuevo confusamente la relación izquierda-derecha a pesar de la nula tradición al respecto.

El pacto en los restantes países fue de tal cariz que dejó fuera a actores de la izquierda, bien de forma expresa, como fue el caso de Ecuador y de Uruguay, bien de forma indirecta, por las condiciones pactadas, en El Salvador y en Guatemala, países en los que la izquierda continuó integrada en la táctica insurgente. En algunos casos extremos se radicalizó y atomizó aún más, dando lugar al nacimiento de expresiones mesiánicas cuyo ejemplo más conocido es el de Sendero Luminoso en Perú.

La marginación de la izquierda, con excepción de Nicaragua, sesgó la orientación de los nuevos regímenes, con mayor incidencia en aquellos en que se llevaron a cabo procesos constituyentes. Sin embargo, la izquierda también quedó afectada por la herencia de la década anterior y por su tradicional falta de vinculación con los elementos poliárquicos de la nueva era. A este respecto, el cuestionario de la variable electoral de la democracia tomó la mayor fuerza en los países centroamericanos, cuando aquella apareció como instrumento fundamental de la política del presidente Ronald Reagan para el área, por necesidad de la política interna de los Estados Unidos. La convicción de la invalidez del gobierno sandinista por su supuesto rechazo de la confrontación electoral, la homologación del régimen salvadoreño de Napoleón Duarte y posteriormente de Cristiani, así como del guatemalteco de Vinicio Cereza y del hondureño de Rafael Callejas, por su apoyo a esta estrategia, y el rechazo del régimen de Noriega por el fraude electoral panameño de mayo de 1989, provocaban una completa repulsa de «elecciones por encima de todo». Contrariamente, la coherencia de esta estrategia producía sobre Chile y Paraguay unos efectos satisfactorios en sus procesos de democratización.

Cuando en la práctica totalidad de los países se produjo la alternativa de una formación política a otra de signo distinto en el camino hacia la consolidación democrática, la izquierda en unos casos se auto-excluyó o vió bloqueado su camino por el régimen político existente (Guatemala y El Salvador) y en otros perdió las elecciones a pesar de las esperanzas suscitadas en sus clientelas potenciales (el proyecto de Alfonso Barrantes en Perú, el de Juan Bosch en la República Dominicana y el de *Lula* en Brasil). En las situaciones en que un rótulo de izquierda pretendió ser el reclamo en la campaña electoral, el programa nunca acompañó ni recogió un contenido basado en las líneas tradicionales, como ocurrió con el peronismo de Menem. En el sentido contrario, la política de la derecha de Balaguer en la República Dominicana presenta una plataforma más progre-

sista que la formulada por el socialdemócrata PRD. Tras los cambios gubernamentales, las políticas puestas en práctica asumieron «más de los mismo», contribuyendo a una completa falsificación del mensaje. Solamente los países en los que la izquierda socialdemócrata se encontraba vinculada a la Internacional Socialista mantenían un esquema menos confuso, si bien las políticas puestas en marcha no contenían elementos grandemente diferenciadores de los de sus antecesores opositores, a semejanza de los casos europeos. De nuevo este era el caso de Costa Rica, de Jamaica y de Venezuela, a los que ahora se añadía el de Ecuador bajo la administración de Rodrigo Borja.

La derecha, sin obtener triunfo electoral alguno que ratificase sus presupuestos, vió como los puntos estelares de sus programas eran seguidos por gobiernos de advenedizos independientes (Fernando Collor de Mello en Brasil y Alberto Fujimori en Perú) o por aquellos otros con etiquetas de rancia militancia popular (Alan García en Perú, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y Carlos Menem en Argentina, fundamentalmente). De esta guisa, las minoritarias formaciones de partido de la derecha constataban el éxito de sus postulados frente a la atónita mirada del electorado.

La visión de la izquierda europea al comienzo de la década de 1990

En las últimas cuatro décadas, la visión europea de América Latina que ha tenido una mayor incidencia en aquel continente ha sido la de la izquierda. En buena medida, la realidad latinoamericana ha sido interpretada habitualmente en Europa y el pensamiento aquí elaborado vuelto a introducir al ámbito latinoamericano con importantes efectos a la hora de crear opinión. Este circuito tuvo serias implicaciones en la conformación de tomas de postura ante la relación izquierda-derecha, fundamentalmente por el mensaje romántico que ha penetrado en la izquierda latinoamericana. Esto queda especialmente de relieve si se recuerda la diferencial frustración sufrida por gran número de intelectuales europeos que vieron impedido el acceso al poder en sus países de sus ideas de forma dilatada. La izquierda todavía no había llegado al poder en Italia y solamente su versión socialdemócrata lo había conseguido en la República Federal de Alemania a finales de la década de los años 60 y en Francia y España una década más tarde, en un marco político muy distinto de decadencia de los proyectos de transformación social. De alguna manera, sobre el continente latinoamericano se proyectaron las inhibiciones y las frustraciones de un proyecto revolucionario imposible de desarrollar en el propio suelo, proyecto que se refería al mito revolucionario que retomaba el sueño de la creación del «hombre nuevo», despreciándose, por vacías, las formas institucionales de la denominada democracia liberal-burguesa, que fueron inmediatamente identificadas como no sustantivas o peyorativamente formales.

A pesar de la dureza y plasticidad de los hechos acaecidos en Europa oriental desde el último trimestre de 1989, algunos sectores de la iz-

quierda europea todavía mantienen una perspectiva romántica de la realidad latinoamericana. De forma que se estima que sólo la democracia sirve para un determinado núcleo de países, conformándose así una visión claramente eurocentrista. Este panorama continúa afectando a la relación izquierda-derecha, siendo en sí mismo un elemento fuertemente simbólico, como quedó de relieve tras la valoración de la derrota en las urnas de Daniel Ortega en febrero de 1990. La visión proyectada se mueve fundamentalmente a lo largo de tres vías que, por otra parte, son constantes desde el triunfo de la Revolución Cubana, habiendo cambiado o los medios instrumentales (en otros términos, la estrategia) o el no rechazo radical a alguno de los elementos constitutivos del régimen político.

La primera de las vías, como ya se ha sugerido, sería el mantenimiento de la idea de la región como un área donde pudieran llevarse a cabo los sueños frustrados de grandes transformaciones sociales y del triunfo de ideales que mezclan visiones rousseauianas con otras de tipo libertario. El reclamo frente a los recientes sucesos acaecidos en Europa oriental podría ser: «¡Nos queda América Latina!». En ese caso se produciría una identificación de la percepción de la revolución de los años 60 como algo pendiente a realizar en el continente, único sitio posible. La visión de Cuba como único reducto de pureza revolucionaria y la complaciente y silenciosa aquiescencia con relación a Sendero Luminoso representan dos vértices en los que se apoya la interpretación romántica.

La segunda vía se basaría en una forma específica de la idealización conceptual del pueblo y la forma por la que se expresaría su capacidad dinámica transformadora frente a otras formas clásicas de articulación política: los movimientos sociales. Los partidos políticos, bajo esta visión, no serían operativos en América Latina, bien por su reducido nivel de institucionalización, bien por el estrecho margen operacional que les deja el régimen político presidencialista, por las dificultades establecidas por las leyes electorales, por la existencia de tradicionales partidos políticos y por el propio momento derivado de situaciones anteriores negativas. El colapso del Estado sería otro elemento a tener en cuenta. Frente a esta situación, los movimientos sociales, se dice, canalizarían el enorme potencial del pueblo. El individuo, inicialmente honesto, se proyectaría en la comunidad, sin la cual su existencia no tendría sentido (Rousseau), ella organizaría sus necesidades sobre la base de una equilibrada relación entre la igualdad y la libertad (socialismo libertario). De esta forma florecerían los movimientos de pobladores, de mujeres, indígenas, etc., convertidos en nuevos actores políticos. El cambio, en todo caso, con respecto a la visión imperante en los años 60 sería notable, pues se habría superado la concepción de conformar una respuesta que combinara la idea leninista de la hegemonía de la élite revolucionaria con la percepción de que la denominada violencia estructural existente sólo podría superarse por medio de la violencia revolucionaria.

La última vía se referiría al énfasis de patrones nacionalistas en la medida en que éstos supusieran claras tomas de postura en, al menos, dos aspectos que han ido matizándose por los cambios de los últimos tiempos: una clara actitud antinorteamericana y un manifiesto rechazo a la recepción de inversiones bajo las reglas del juego internacional que se combina con una contradictoria opinión de denuncia del problema de la deuda externa. De forma cínica e incompleta es así mismo abordado el narcotráfico como un asunto exclusivo de los países consumidores.

Sin embargo, esta no es la única visión de la izquierda europea. Frente a ella se plantea la de centro-izquierda representada por los partidos integrados en la Internacional Socialista. En ella se recoge desde finales de la década de los años 60 un listado de temas que se centran en dos grandes líneas. La primera se refiere al apoyo inequívoco de la democracia como forma de gobierno mientras que la segunda concierne a la adopción de una estrategia gradualista y negociadora que afecta a la velocidad en que deben realizarse reformas y a la necesidad de suscribir pactos, tanto con instancias internas como internacionales, para superar los efectos de la crisis. De alguna manera, la revalorización de estos aspectos así como su asimilación por parte de la izquierda latinoamericana no fue ajena a la influencia de la experiencia del exilio europeo de la izquierda del Cono Sur. Por otra parte, a mediados de 1991, únicamente en Ecuador, Jamaica y Venezuela gobernaba la socialdemocracia, estando presente en el gobierno chileno de coalición. Las políticas diseñadas en estos casos diferían en muy poco de las puestas en marcha por los gobiernos anteriores (marcadamente más conservadores en Jamaica y Chile), siendo indiscutible la forma de engarce de las economías nacionales con la internacional, manteniéndose los niveles de acuerdo con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, avalando un reducido papel del sector público y de la planificación en la economía nacional, y acentuando políticas estrictamente monetaristas. Además, en los restantes países latinoamericanos, salvo en Costa Rica y en la República Dominicana, el grado de desarrollo de la socialdemocracia continuaba siendo muy limitado, pudiéndose concluir que la incidencia de la visión mencionada era bastante restringida.

La presencia de las reinterpretaciones de la izquierda y de la socialdemocracia europea en América Latina, en sus efectos sobre la acción y el pensamiento tanto de la derecha como de la izquierda regional han contribuido a mantener la tradicional confusión en la relación izquierda-derecha. A ella se ha venido a unir el retórico discurso desde la derecha del fin de las ideologías, retomado como fin de la historia que pretende simplificar la posibilidad de las opciones políticas. En el caso latinoamericano, todo ello contribuye a que la influencia ejercida sobre su vida política por la herencia del Estado populista, ahora desmantelado en gran parte, lejos de eliminarse, persista, de forma que una perplejidad generalizada y duradera se abate sobre la relación izquierda-derecha.